



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL
URUGUAY

RESOLUCIÓN N° 33/2025

Concepción del Uruguay, 23 de mayo de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en las presentes actuaciones del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal, caratuladas: “**B [REDACTED] A [REDACTED], GUIDO ISAIAS Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL Y INFRACCIÓN ART. 303**”, Expte. Judicial FPA **7567/2021/TO1**, venidas a despacho para resolver el pedido de apartamiento de la UIF incoado por los Dres. Ferrando y Virué en representación del procesado Leonardo César T [REDACTED].

Y CONSIDERANDO:

I. Que la defensa de Leonardo César T [REDACTED] se presentó el pasado 23/4/2025 y requirió que se disponga el apartamiento de la Unidad de Información Financiera como parte querellante en las presentes actuaciones por carecer de legitimación, al quedar sin efecto la única norma que la autorizaba.

En ese sentido, recordó que en ocasión de constituirse como parte, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA textualmente señaló que *“en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2226/2008, el artículo 4° de la Ley N° 17.516 y su modificatoria Ley N° 19.539 y el artículo 8° del Decreto N° 411/80 (T.O. según Decreto 1265/87), venimos a solicitar se tenga por parte querellante a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante e indistintamente “UIF” o “Unidad”).-”*.

Dejo indicado que la única disposición legal específica vinculada a ese organismo fue la del Decreto 2226/2008, cuestión que surge con meridiana claridad a poco de advertir que el resto de leyes y decretos mencionados –referidos a la representación del Estado en general- son



anteriores a la creación del organismo por la Ley 25.246, publicada en el Boletín Oficial del 10 de mayo de 2000.

Destacó que ese decreto fue expresamente derogado por el artículo 10 del Decreto N° 274/2025 de fecha 16 de abril de 2025, que fue dictado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL *“en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 3°, inciso a) de la Ley N° 27.742”* y que conforme a su artículo 11 tiene vigencia a partir de su publicación, verificada en la edición del Boletín Oficial del mismo 16 de abril de 2025, por lo que esa derogación exteriorizó el ejercicio de las facultades que le confiere al PEN el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. En función de ello sostienen que a partir del 16 de abril de 2025, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA carece de legitimación para intervenir como querellante en un proceso como el presente, al quedar sin efecto la única norma específica que la autorizaba.

Memoró también que, el PEN no sólo derogó el Decreto N° 2226/2008, sino que en ejercicio de la delegación legislativa instituida en el artículo 3 inciso "a" de la Ley 27.742, modificó el texto del artículo 13 de la Ley 25.246, que incluía la potestad de colaborar en la persecución penal, por *“3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente.”*.

Luego de invocar las normas que regulan la cuestión, refirió que por un lado han cesado ipso jure las facultades que a la UIF le asignaba el Decreto N° 2226/2008 y por otro se ha modificado el inciso 3 del artículo 13 de la Ley 25.246, eliminando toda potestad de participación de la UIF en la persecución penal.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL
URUGUAY

Sumo a ello, que las declaraciones del Ministro de Justicia Doctor Mariano CÚNEO LIBARONA, transcriptas en la edición del diario La Nación del 18 de abril de 2025, en las que luego de invocar las razones políticas que la sustentaron, señaló que *“nosotros decidimos despolitizar la UIF, quitándole la facultad de querellar, como hacen todos los países del mundo menos dos”*, agregando luego que *“la decisión responde además a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que supervisa a la UIF, que advirtió a la Argentina sobre la necesidad de que su UIF deje de intervenir en causas judiciales ya que interfiere con su verdadera función”* (<https://www.lanacion.com.ar/politica/mariano-cuneo-libarona-y-mariano-federici-se-cruzaron-por-la-decision-del-gobierno-de-limitar-a-la-nid18042025/>).

Entendió sobre la base de los argumentos y leyes que invocó que se vería severamente lesionado el derecho de defensa en juicio y la igualdad de armas que debe reinar en un plenario si se permite que un tercero ajeno, que por ley le han quitado las facultades para ser acusador, intervenga en calidad de querellante, ya que estaremos proclives a que este órgano mantenga su tesitura acusatoria junto al MPF mientras que, por el otro lado, carece de facultades según la ley para intervenir, por lo que claramente infieren una violación al debido proceso. Citó jurisprudencia en apoyo a su postura.

En consecuencia, solicitó que se imprima el trámite correspondiente y previo traslado a la U.I.F., se decrete el apartamiento de la U.I.F. como parte querellante en este expediente.

II. En su oportunidad, se corrió vista a la parte querellante, ocasión en la que la Unidad de Información Financiera postuló el rechazo de la falta de acción.



Concretamente sostuvo que “el De. 274/2025 NO establece una prohibición para continuar actuando en aquellas causas en las que esta UIF ya se encuentra presentada, ya que nada indica acerca de las causas en trámite, con lo cual, el mencionado decreto no modifica el temperamento procesal adoptado oportunamente por esta UIF en la presente causa. No obstante lo expuesto, vale decir que la calidad de ofendido que habilita a constituirse como parte querellante, atañe tanto a aquel que es sujeto pasivo típico del delito, como también al organismo público que tiene a su cargo la protección de un determinado bien jurídico, en los casos en que ese bien se vea vulnerado por la conducta delictiva investigada. Esto conduce a la interpretación de que las personas jurídicas y el Estado a través de sus diferentes organismos y entes, pueden peticionar su intervención como querellantes, cuestión que resulta pacífica en la jurisprudencia. Al respecto, la Ley N° 26.683, al incorporar el Título XIII al Libro Segundo de nuestro Código Penal bajo la denominación de “Delitos contra el orden económico y financiero” (artículo 303 y subsiguientes del Código Penal), confirió tutela al bien jurídico identificado como el “orden económico y financiero”. Conforman entonces el objeto de la acción prohibida el poner en circulación en el mercado bienes que provienen de un ilícito penal, con la consecuencia posible de otorgarles apariencia lícita, conducta ésta que lesiona la disposición de bien jurídico precitado (...).”

Añadió que “En pos del combate contra esta criminalidad organizada, se requiere el establecimiento y/o implementación de adecuadas estructuras de control que permitan detectar sus actividades y es la UIF el organismo especializado en la materia, según lo prescribe la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. El orden económico-financiero constituye un bien jurídico de naturaleza colectiva cuya protección excede los intereses individuales y resulta esencial para la estabilidad





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

institucional y la confianza en el sistema legal y financiero. La UIF, creada por la Ley N.º 25.246, es el órgano del Estado argentino específicamente encargado de resguardar ese interés público. En este contexto, cuando se verifica una afectación concreta a ese bien jurídico, la UIF -en tanto organismo que tiene a su cargo su tutela- puede válidamente ser considerada particular ofendido, lo que la habilita para ejercer la acción penal privada accesorio en calidad de querellante, conforme al régimen previsto por el Código Procesal Penal. Siguiendo estos lineamientos, podemos afirmar que la legitimación de la UIF para querellar no derivaba exclusivamente del Decreto 2226/08. Su verdadera fuente reside en: su carácter de organismo técnico especializado en la prevención y represión del lavado de activos (Ley 25.246), y en el reconocimiento general del derecho procesal de quien sufre una afectación legítima al bien jurídico cuya tutela le ha sido conferida. Por ello, el rol de querellante de la UIF en los procesos criminales encuentra su apoyo en los intereses de carácter difuso que se encuentran en juego al cometerse los delitos previstos en el Título XIII y su legitimación activa en tal sentido redundando en beneficio del mismo Estado y de otros afectados que se puedan ver involucrados en dicho proceso. Sin perjuicio de lo expresado, en el plano jurídico, bueno es recordar que la ley 17.516 del Régimen de Representación Judicial del Estado (BO 9.11.67), reformada por la ley 19.539, en su Art. 4º, establece que: "...El Estado podrá asumir el carácter de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público, y particularmente cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, y el orden público, la Administración Pública y el patrimonio y rentas fiscales, y también en los casos de delitos contra la seguridad común, la tranquilidad pública y la fe pública..."



Concluyó *“En este sentido, no cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito (art. 303 del Código Penal) destacando, que esta UIF también se encuentra legitimada en los delitos precedentes mencionados de forma enunciativa en la ley N° 25.246 y modificatorias, que en su art. 6° inc. k) le encomienda la prevención de los delitos provenientes del “Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la ley 27.430 o la que en un futuro la reemplace”, sin perjuicio de que cualquier delito es apto para configurar un precedente para el lavado de activos, particularmente aquellos de contenido patrimonial. Esta postura ha sido ampliamente receptada por la jurisprudencia argentina en distintas causas en las que se investigaban tanto el delito de Lavado de Activos como sus delitos precedentes.”*

Citó jurisprudencia en apoyo a su postura e hizo reserva de caso federal.

En definitiva, solicitó que se rechace el planteo de falta de acción interpuesto por la defensa de Leonardo T [REDACTED].

III. Finalmente, el 12/5/2025 se corre nueva vista a las partes sin que a la fecha se hayan realizado nuevas presentaciones.

IV. Planteada como ha quedado la cuestión, se adelanta que la pretensión introducida no habrá de tener favorable acogida.

En orden a la capacidad de la Unidad de Información Financiera para ejercer el rol de querellante en el proceso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció por unanimidad favorablemente en la causa N° 305/2013, caratulada: “García Moritan, Roberto s/recurso de casación” (rta. 5/09/2014, reg. N° 1722/14), postura que fue reiterada en tantos otros precedentes (vid. causa N° 589/2013, caratulada: “Monti, José Luis s/recurso de casación”, rta. 4/11/2014, reg. N° 2242/14; causa





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Nº CFP 12441/2008/20/1/CFC3, caratulada: “López, José Francisco s/recurso de casación”, rta. 9/2/2018, reg. Nº 20/18; y Causa Nº CFP 2885/2016/12/CFC1 “Vazquez Manuel, Couri Ribeiro Mauricio, Jaime Ricardo, Nn, Castro Siderol Hector Ramon, Iecsa S.A., rta. 11/7/2018, reg. Nº 886/2018).

Concretamente en dicha ocasión, se advirtió que: “... la ley nº 17.516 regla la facultad de ser querellante del estado nacional ya que, como persona jurídica, tiene la capacidad de estar en juicio y constituirse como tal. Esto es así, a partir de lo dispuesto en el artículo 1º de la mencionada norma, en cuanto establece que: ‘Salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado Nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos, nacionales o locales: a) en Capital Federal, por los letrados dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos Ministerios, Secretarías de Estado, reparticiones o entes descentralizados...’. En esa misma línea, en su artículo 4º dispone que: ‘El Estado podrá asumir el carácter de parte o querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público, y particularmente cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional...’.

Asimismo, se expresó que: “La ley nº 25.246 -modificada por ley nº 26.683- en su art. 6º establece que la Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir, por un lado, el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal). Así, se enuncian una serie de tipos penales de los que ‘preferentemente’ podrían provenir esos activos, entre los que se encuentran los delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del



título XI del Libro Segundo del Código Penal, entre otros. Por otro lado la ley prevé capacidad para actuar en el delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal)".

También se agregó que "...la capacidad para querellar fue otorgada expresamente por el decreto P.E.N. n° 2226/08 que reza: 'Autorízase a la titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten''. En definitiva, se concluyó que: "...el decreto que reglamenta la potestad para querellar contempló cierta amplitud en cuanto a los casos en que la UIF podrá reclamar dicho rol".

A su vez, sobre el nuevo decreto reglamentario, en consonancia con lo manifestado por la UIF, entiendo que el texto del referido decreto no contiene ninguna cláusula que ordene el apartamiento de la UIF en los procesos penales en los que ya se encuentra constituida como parte querellante. Excluirla en esta etapa del proceso, implicaría extender los efectos más allá de lo que establece el texto de la norma.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce, como principio, que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones para adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 306:721; 307:518; 319:2249 entre otros).

En ese sentido, si bien el Decreto N° 2226/08 era la única fuente reglamentaria que habilitaba expresamente a la UIF a actuar como parte querellante en causas penales; no hay en el resto del Decreto N° 274/25 como en ninguna otra normativa, disposición alguna que prohíba en





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL
URUGUAY

términos literales su intervención como parte querellante en procesos penales. Por el contrario, entiendo que se fija una política criminal hacia el futuro a raíz de las recomendaciones efectuadas por el GAFI.

Además, corresponde mencionar que la UIF ya adquirió la calidad de parte querellante en la presente causa mediante un decreto firme y dicha intervención ha sido ratificada mediante numerosas resoluciones.

Asimismo, se advierte que apartarla en este estadio de la causa, implicaría un detrimento en la prosecución de los complejos sucesos que aquí se investigan y atentaría contra la uniformidad del proceso tal y como se viene desarrollando; el cual además ya posee legajos en distintas instancias procesales, en las cuales de no haber una decisión análoga a la aquí planteada, la UIF seguiría actuando y siendo parte querellante.

En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de la defensa de Leonardo T [REDACTED] y mantener a la UIF como parte querellante en este proceso penal.

Por todo lo hasta aquí expuesto,

SE RESUELVE:

1) NO HACER LUGAR a la exclusión de la UIF como parte querellante.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.

Notifíquese.

MARIELA EMILCE ROJAS

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

JOAQUÍN LÓPEZ DEL MOLINO TORRES

SECRETARIO



